

[El gobierno Militar: 1968 - 1980](#)

[Orígenes. Primera etapa: 1968 – 1976](#)

[El contragolpe: La segunda etapa 1975 – 1980](#)

[La coyuntura de fines de los 70. La Constituyente.](#)

[La nueva Constitución. Las elecciones de 1980](#)

[La Década del 80. Los gobiernos de Acción Popular \(1980 - 1985\) y el APRA \(1985 - 1990\). El Fondo](#)

[Monetario Internacional](#)

[Crisis del modelo desarrollista](#)

[El debilitamiento de la sociedad civil](#)

[Acciones antisubversivas y el terrorismo de Estado.](#)

[Los grupos insurgentes y el terrorismo](#)

[Conclusiones](#)

PARTE II

EL IMPERIALISMO NORTE AMERICANO Y LA OLIGARQUÍA PERUANA EN EL SIGLO XX

CAPITULO III

EL GOBIERNO MILITAR: 1968-1980

Orígenes. Primera etapa: 1968-1976

Era el momento en el cual los militares estaban siendo formados en el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM), fundado en 1953, luego que en 1947 el Perú firmara el Pacto de Río de Janeiro constituyéndose como miembro de la Junta Interamericana de Defensa. Este pacto posteriormente va a ser firmado por Odría y por el presidente norteamericano Eisenhower, en el que se definió el papel de las Fuerzas Armadas peruanas en la defensa hemisférica contra el peligro comunista.²⁷¹ Como dice Cotler ello significó una remodelación de la institución castrense, en el estudio de las modalidades de táctica y estrategias militares “basadas en la realidad concreta de la situación peruana”. Desestimando los marcos teóricos de los textos castrenses franceses. Como en lo que se refiere a pertrechos militares, que fueron renovados, y con ellos, la consabida asistencia técnica de los asesores norteamericanos.²⁷² Seguimos con Cotler, citando a Villanueva²⁷³ nos

²⁷¹ Un asesor de la Central de Inteligencia Americana (CIA) será el teórico para esta etapa de lucha contra el comunismo en el plano de las ideas. Este personaje es W. W. Rostow con su libro: *Un manifiesto anticomunista*. Él también se encargará de divulgar la teoría del desarrollo.

²⁷² COTLER, *op. cit.*, p. 329 ss.

²⁷³ VILLANUEVA, *El CAEM y...*

dice que al CAEM se le adjudicó una importancia decisiva en el desarrollo de *un nuevo profesionalismo militar dedicado al desarrollo y la contrainsurgencia*.²⁷⁴ El concepto de guerra va a cambiar radicalmente a partir de este período, la Doctrina de Defensa Nacional se va equiparar con la Política General del Estado.

Este concepto de la guerra será entendido como que “es total e integral”, con lo cual se expresan dos hechos evidentes: uno, que para obtener la victoria es preciso emplear todos los medios y recursos de la Nación; otro, que la lucha se lleva a cabo en los dominios político, económico, psicológico y militar...; es deber de los poderes del Estado, por ser los únicos que tienen la autoridad y visión de conjunto, orientar e impulsar el desarrollo del Potencial Nacional para ponerlo en condiciones de proporcionar directa o indirectamente ese total de medios determinados como necesarios para garantizar la seguridad integral de la Nación... el conjunto de medidas y de previsiones... para alcanzar este fin, *constituye el Plan de Preparación del Potencial Nacional para la Defensa*”.²⁷⁵

El CAEM se dedicó, desde entonces, a estudiar la realidad peruana; ellos mismos contrataron a la mejor de la intelectualidad peruana para sus cursos superiores. En esta década, siguiendo los lineamientos ya expuestos por el fundador del CAEM, en 1957 el ejército *funda su Servicio de Inteligencia*. Con este servicio el ejército recogería datos de la realidad del país y con sus estudios teóricos arribarían a la conclusión de que las condiciones de extrema pobreza son las que propician los movimientos populares de la época; que el poder real no se encuentra

²⁷⁴ STEPAN, Alfred. “The new professionalism of Internal Welfare and Military Role Expansion”. En *Autoritarism Brasil, Origins Policies and Future*. EE. UU., Yale University Press, 1973.

²⁷⁵ DEL CARMEN MARIN, José. “Preparación para el Alto Mando, preparación y ejecución de la Defensa Nacional”. En *Revista Militar del Perú*. Volumen I, número 628, volumen 2, N.os 635-636, pp. 1-15, 1956. Se trataba de escritos del fundador del CAEM, citado por Julio Cotler, *op. cit.*

en el Estado demoliberal, que aquello es sólo una formalidad que no tiene sustento real, el verdadero poder está en los latifundistas, exportadores, banqueros y en las compañías norteamericanas.

Alertan a sus mandos intermedios y tropa de que están en guerra, agregan, que la guerra subversiva o la guerra revolucionaria es universal, ella avanza cada día, una pulgada o un kilómetro, en todos los países del mundo. En el Perú, también. "Es una guerra tan temible, o más temible que una guerra nuclear. Ella amenaza los cimientos mismos de la *civilización occidental y cristiana* y la obra de tantos siglos... el enemigo está en todas partes y en ninguna... si se pretende luchar en forma clásica contra una guerra subversiva, el mejor ejército será destruido invariablemente y un día el enemigo, subterráneo e invisible... explotará por todas partes y antes que se pueda apuntar... las masas populares serán dueñas del poder por la fuerza y el terror, sumirán en la esclavitud espiritual a todos aquellos que no fueron ganados por la doctrina comunista".²⁷⁶

Estaba claro que la recomposición, la reestructuración de las Fuerzas Armadas de Perú tenían como fin enfrentar la amenaza comunista, la defensa de la sociedad occidental y cristiana, la defensa del poder y del Estado, su enemigo será la población civil, así como los grandes males de la sociedad: los desniveles abismales de la distribución de la riqueza, desempleo, analfabetismo, no desarrollo social, político y económico en las poblaciones andinas, y en la costa negros y mestizos. Se trató de acto preventivo para evitar un proceso revolucionario radical. Con el asesoramiento norteamericano se inauguró una nueva etapa de la *política hemisférica de seguridad y desarrollo*, que en la década de los

²⁷⁶ GALLEGOS, Enrique. "¿Debe preocuparnos la guerra subversiva?". En *Revista de la Escuela Superior de Guerra*. Año VII, enero-marzo, N.º 1, Lima, pp. 18-20, 1960. Citado por Julio Cotler, *op. cit.*

60 cambiará a una política conocida de Seguridad Nacional. Pero no sólo en Perú, sino en toda Latinoamérica. Esta política se implementará para evitar gobiernos de corte demoliberales radicales, reformistas radicales, prosocialistas, en todo el continente al sur del Río Grande, en las Antillas y el Caribe e imponer a Juntas Militares amigas a la sociedad occidental y cristiana. Los medios en esta lucha incluían la tortura con la bendición de un sector de la Iglesia católica, la más conservadora. En los cursos de formación de comandos dados por el ejército americano, hoy no hay duda, se enseñaron disciplinas como la tortura a los futuros gobernantes de América Latina, los militares. Siguiendo las viejas enseñanzas de la recordada institución de la defensa de la fe cristiana, que en esa época era la defensa de la sociedad occidental cristiana: la Santa Inquisición.

En los 2000, al trabajar en esta investigación, nos resistimos a entender la buena fe de los intelectuales de izquierda, demócratas, progresistas, cristianos progresistas que apoyaron incondicionalmente el proceso político militar el cual comenzó el 3 de octubre de 1968, si tomamos en cuenta todo lo hasta aquí explicado para evitar resueltamente, en términos de guerra, que los sectores populares —las masas—, puedan tomar el poder, compartir el poder o disputar el poder. El golpe militar del 3 de octubre de 1968 no fue un golpe tradicional, eran las Fuerzas Armadas que actuaban en el escenario político, económico, social e ideológico de manera institucional, por primera vez en la historia republicana. Ésa será la base para entender la nueva etapa de la Doctrina de la Seguridad Nacional en los 90-2000, que será el tema central de la tercera parte de este trabajo.

En consecuencia, con el pronunciamiento militar del 3 de octubre de 1968 se inaugura un proceso que pondrá “fin” al período de dominación

oligárquica en la manera tradicional, se aperturará una nueva forma de dominación en el Perú. Se trataba de una *experiencia reformista* singular consolidando un proceso gestado en las décadas anteriores; redefinió el cuadro de relaciones de fuerza abriendo un período de transición en relación con la problemática de la forma de Estado en el país. Ambos aspectos, mutuamente interrelacionados, determinaron a su vez alteraciones específicas en las relaciones Estado-sociedad que se materializan en las instituciones que configuran el aparato estatal. El complejo proceso político conducido por la Fuerzas Armadas desde 1968 fue la resultante de la crisis del Estado oligárquico expresada en la década del 60.

La sociedad peruana se manifestó en la crisis mediante la insurgencia de nuevas fuerzas sociales dinamizadas en torno a un lento proceso de modernización. Este proceso se puso en marcha desde las décadas anteriores remontando la modalidad primario-exportador de acumulación, dinamizando a los modernos sectores industriales y financieros; operando cambios en las prioridades y en las formas de articulación del capital extranjero dentro de la sociedad. Una clase dominante preñada de anacronismos se resistía al cambio político y controlaba el Estado por la vía de la exclusión: pero en su propio seno —y en dinamizados sectores medios— encontró variantes de conflicto que en forma sistemática debilitaron los mínimos de consenso del bloque en el poder. Las movilizaciones campesinas de los años 60, invasiones de tierras en las grandes ciudades y tierras agrícolas en el campo, luchas que estaban siendo conducidas por un líder pequeño burgués, pero entronizado en el mundo andino: Hugo Blanco, creó pánico en los terratenientes, principalmente, andinos; el amplio proceso migratorio y la explosión urbana agrietaron el viejo orden político amenazando su perspectiva futura con el inicio de acciones armadas como la de 1962 y

la de 1965 (Movimiento de Izquierda Revolucionaria [MIR]) y el Ejército de Liberación Nacional [ELN]) —estos últimos mediante la modalidad de guerra de guerrillas. El MIR tenía una plataforma política, un programa esencialmente agrario para la solución de los problemas del Perú. Estos grupos armados fueron rápidamente controlados, diezmados o derrotados, por el ejército peruano que contó con asesores norteamericanos.

Era la primera vez en el siglo XX que un sector de la población, pequeña burguesía, radicalizó sus posiciones y optó por el camino más sacrificado, el de las acciones armadas para la captura del poder. La dirigencia principal de esta población provenía esencialmente de las escisiones juveniles al interior del partido aprista peruano, quienes estaban desilusionados por la convivencia o la traición de sus dirigentes nacionales. Las respuestas reformistas liberales de los años 60 y el ambiguo juego político de los modernizados sectores industriales no lograron imponer sus términos ni ampliar una base de consenso luego de llegar al gobierno el partido Acción Popular con su jefe político Fernando Belaúnde (1963-68) a lo que se le debe agregar su incapacidad para resolver la crisis del sistema. Todo ello explica en buena medida el margen de juego que el general Juan Velasco Alvarado encontró el 3 de octubre de 1968, representante de las fuerzas que irrumpían en el escenario de una manera institucionalizada con su propia programa:²⁷⁷ una reforma agraria, una reforma de la empresa privada en organizaciones comunitarias, la supresión de la autonomía universitaria, incautación de los diarios más conservadores e influyentes, la instrumentalización de un aparato que dio estructura de partido a la población pero dirigido por el Estado que fue el Sistema de Movilización

²⁷⁷ HALPERIN DONGHI, *op. cit.*, p. 619 ss.

Social (SINAMOS) que cooptó a los sectores más progresistas y de izquierda, incluso radical para orientar y dirigir el programa a la clientela política del gobierno militar. Para neutralizar a los sectores progresistas de los trabajadores y contrarrestar la influencia del partido aprista en los trabajadores del país, principalmente los de Lima, fundaron su propia central sindical.

El gobierno militar, con su programa de reforma agraria, le arrancó a los sectores izquierdistas una de sus banderas principales. El objetivo primario de esta reforma, que llevó a cabo primero en las haciendas costeñas, tenía el propósito de minar el sólido norte, bastión político del partido aprista, antiguo enemigo que había que liquidar en tanto que de sus filas habían surgido los sectores radicalizados en la década del 60. La reforma tuvo éxitos limitados, se fundaron tanto en la sierra como en la costa a efectos de minimizar los efectos de la intervención de las grandes y medianas propiedades agrarias, las Sociedades Agrícolas de Interés Social. El resultado neto fue el estancamiento productivo lo que produjo en el caso de la sierra peruana la movillización migratoria masiva a las ciudades costeras. En las ciudades se intentó la reforma de la empresa creando las Comunidades Industriales donde debían convivir el capital y el trabajo no como sectores antagónicos sino como aliados productivos para el incremento de la riqueza. Este experimento, no tuvo la aceptación del sector empresarial, boicoteándolo para, finalmente, ser eliminado, ya en la segunda etapa de este proyecto institucional de las fuerzas armadas, con Morales Bermúdez.

El gobierno del General Juan Velasco Alvarado resolvió, a su modo, la crisis de la dominación oligárquica; forzó la recomposición del bloque en el poder al excluir a los agroexportadores, a los gamonales y a la tradicional facción financiera ligada a éstos. "Nacionalizó" antiguos

enclaves mineros y petroleros así como importantes servicios públicos directamente manejados por el capital norteamericano. Se perseguía en ellos un cambio que incidiera en la base material de sustento de estos sectores del poder tradicional forzando, como correlato, un proceso que potenciara y dinamizara los sectores modernos de la burguesía industrial y financiera. La conformación del gobierno, en cuyo seno subsistieron tendencias contradictorias desde 1968, hizo posible un juego de presiones que partiendo de los gremios de la burguesía y de los grandes diarios impactaban en la cúpula militar y agudizaban la lucha de tendencias.

Se sentaron así las bases para el desarrollo de un profundo conflicto entre el Gobierno Militar y los sectores terratenientes, gamonales y exportadores mencionados. El Estado fortaleció notoriamente su capacidad de intervención en la economía. El poder expropiado a los sectores tradicionales en el agro, la banca ligada a los agroexportadores, la minería, el petróleo, los servicios, etc., quedó bajo control estatal y permitió asociar, en lo concreto, a algunos sectores de la burguesía. Con una parte de estos nuevos sectores de poder es que el velasquismo va a gobernar, pero sin dejar de existir las serias contradicciones con los sectores desplazados; renuentes a la creación de un Estado centralizado y la ampliación del mercado interno, nunca renunciaron a la posibilidad de recap-turar su viejo poder decidiendo enfrentar el proyecto velasquista dentro y fuera del gobierno. Hasta 1973 se intentaron obtener virajes en el gobierno mediante la presión y la persuasión, la penetración de la cúpula y el logro de canales internos de representación en su seno.

Las sucesivas victorias de la tendencia "radical", que encabezaba Velasco, arrinconaron progresivamente a los líderes militares que lo

enfrentaron; el proceso de profundización que se operó en torno a esta pugna incluyó un discurso ideológico que “recusaba el capitalismo” y medidas como la Ley de Propiedad Social o la expropiación de los diarios,²⁷⁸ parece convencer a los empresarios y a los políticos de viejo cuño de la necesidad de enfrentar decisivamente el proyecto velasquista, el cual refuerza el poder del Estado y pretende movilizar a las masas en su apoyo (SINAMOS).

El contragolpe: La segunda etapa 1975- 1980

La ofensiva de los sectores desplazados del poder entre sus acciones de recaptura del poder, entre 1973 y 1976, no excluyó la colaboración de algunos sectores empresariales con el gobierno para alimentar adeptos y con ello agudizar la lucha interna; se recurre esta vez a una amplia coordinación entre líderes de los viejos partidos, prensa, colegios de abogados y gremios del empresariado. La progresiva y consistente dinamización del movimiento popular en la década del 70 alimentó los temores de la clase dominante, tanto en el empresariado como en los políticos tradicionales y en los militares reformistas menos audaces. La ofensiva de los sectores desplazados encontró así terreno preparado en la propia composición y rasgos del gobierno militar, pudiendo obtener en julio de 1976 la victoria más consistente: el desplazamiento de los sectores progresistas de la cúpula castrense. Indudablemente, poco antes, con el derrocamiento de Velasco, se había abierto la compuerta que hizo posible el viraje, esta depuración gradual y luego la contrarreforma. Así el 29 de agosto de 1975, al derrocar a Velasco, se afectó parte importante de la cúpula castrense y sus mandos regionales incluyendo

²⁷⁸ Discurso orquestado a partir de los sectores intelectuales de izquierda cooptados por el velasquismo que quieren profundizar las “reformas”, sin tener presente el objetivo estratégico del Gobierno militar.

las tendencias más radicalizadas del reformismo militar. Este hecho hacía difícil al gobierno de la segunda fase (Morales Bermúdez) recomponer plenamente su total ejercicio del poder sin fisuras, los sectores que los apoyaron pedían más. Por ello, desde Setiembre de 1975 la ofensiva se agudizó en todos los planos hasta arrinconar al gobierno y eliminar de éste las posiciones más radicalizadas del reformismo alterando con ello la anterior preponderancia pequeño-burguesa del régimen militar, para enrumbarlo en función de la recomposición de los viejos sectores en el poder.

La nueva clase social en el poder no podía ser la misma luego de un proceso que había partido desde las mismas esferas del poder. Los nuevos retos en el ámbito mundial así lo exigían; los tradicionales sectores tuvieron que aceptar que había llegado la hora de su reforma interior y de su cambio. Al excluir del gobierno y de la Fuerzas Armadas las tendencias progresistas que encarnaban los radicalizados generales velasquistas se produjo un cambio en la cúpula castrense que enrumbar el gobierno de Morales Bermúdez hacia la "corrección" de las reformas velasquistas y señalará el derrotero para la transferencia a los civiles. Era hora de volver a los cuarteles en espera de mejores tiempos. Con esta recomposición del gobierno se concretó un rumbo diferente al de todo el período anterior: el gobierno de Morales Bermúdez abandonó sus intentos de conciliación con el campo popular, sacrificó las reformas políticas más características poniendo todo su empeño en restablecer la quebrada relación con los empresarios privados y los políticos tradicionales y la burguesía. Éstos serán los interlocutores privilegiados que, aunque demandarán más de lo que los militares gobernantes podían ofrecer, sobre todo ante las dificultades económicas, recibieron gradualmente la acogida necesaria para acelerar la corrección de rumbos del gobierno. Y sobre esta base mantendrán la iniciativa política

y forzarán la transferencia del gobierno. Sin embargo, si bien el gobierno reprimió al pueblo e impuso una férrea disciplina laboral, no fue capaz de disciplinar su política económica que siendo drástica en comprimir el salario real no logró frenar el gasto público. Además en este primer tramo del período 76-80, que cubre de julio de 1976 a julio de 1977, no se aprecia nitidamente una definición en la cúpula castrense que indique efectiva retirada a los cuarteles tal como lo demandan los gremios y políticos civiles de la burguesía. Este hecho hace recrudecer los niveles de conflicto pues en la cúpula los ministros quieren “hacer obra” a la par que consolidan los gastos de defensa y, de hecho, anulan el efecto del plan de estabilización del Ministro de Economía (Barúa).

Por otro lado, durante el año de emergencia, cuando ya en la cúpula castrense no quedan pretensiones reformistas, al amparo del poder absoluto conferido a los mandos castrenses por la legislación de emergencia, se encubían “voluntades de permanencia” combinadas con algunos intentos cuasigolpistas. De este modo, durante el primer año del período 1976-1980 se dió un intento de continuar gobernado sin fijar fecha de salida —contrariamente a lo que reclamaban los trabajadores y los políticos diversos. Esa voluntad de permanencia se combinó con la corrección de las reformas, los incentivos otorgados a los empresarios y la represión a las fuerzas populares, presentándose reiteradamente el gobierno como “el único capaz” de poner orden en este país. El fracaso de este intento, puesto de manifiesto en julio de 1977, llevó al gobierno al máximo punto de aislamiento y a definir los términos y plazos de la transferencia del poder a la civilidad. Luego de un exitoso paro nacional de los trabajadores de la ciudad y el campo, rompiendo a su vez la hegemonía en el mundo sindical del aprismo, surgió por primera vez un nuevo movimiento sindical organizado dirigido principalmente por los pequeños partidos de izquierda.

La nueva burguesía bancaria, financiera e industrial, no lo podía tolerar, era demasiado riesgoso dejarlos que se desarrollen (el nuevo movimiento sindical ya lejos del control del aprismo), el 19 de julio fue un día histórico en los sectores populares del país. El país se tambaleó por primera vez. Los trabajadores se hacían escuchar. La respuesta de Morales Bermúdez y la vieja dirigencia retardataria y la nueva que era beneficiaria directa de la contrarreforma de Morales van a saludar que éste autorizara el despido de todas las dirigencias sindicales del país hayan o no participado del paro nacional del 19 de julio. Antes y después de esta fecha la historia será radicalmente distinta.

Hoy se puede confirmar lo que se decía entonces, el intento de Morales Bermúdez fracasó rotundamente: (a) fracasó la política económica de Barúa y el empresario Piazza (fue un intento tardío de poner directamente a los industriales en el gobierno), apenas duran un par de meses enfrentándose, también, a la voluntad de permanencia de la cúpula castrense que en economía era sinónimo de mayor gasto; (b) fracasó la política represiva ante el masivo y en gran parte espontáneo rechazo popular y ante la capacidad coyuntural de la izquierda de dar por un momento dirección política a esta protesta masiva. Logró el definitivo paro nacional del 19 de julio de 1977 a pesar de la continuada vigencia de la inexistencia de libertades impuesta durante el estado de emergencia.

Estos dos fracasos llevaron al gobierno al más profundo aislamiento en un momento en el cual afloraba a la escena política la profunda crisis orgánica en la relación de este Estado con amplias y distintas fuerzas de la sociedad peruana. En julio de 1977 el gobierno no sólo estaba aislado del pueblo, lo estaba también dentro del nuevo campo burgués pues un gran sector de los políticos de la burguesía insistió en reclamar un

cronograma electoral y los empresarios nativos que aguantaron el coqueteo de un año se impacientan ante la profundización de la crisis económica y, ahora desde la propia sociedad de industrias y no sólo desde los partidos tradicionales reclaman elecciones generales. La nueva burguesía, en conjunto, tomó cartas en el asunto para evitar la indefinida continuidad de este régimen. Es en este punto crítico donde se define pública y solemnemente el cronograma que dará término al régimen militar.

Morales Bermúdez, en nuevo ajuste de pragmatismo, no sólo verá en este cronograma el camino adecuado para conseguir objetivos importantes para el poder militar, sino que lo seguirá puntualmente, como derrotero propio. Sin embargo, el desarrollo de la crisis y la zigzagueante política del gobierno lo llevó a una coyuntura. En ésta no sólo la burguesía estaba presente en la escena política sino, también, un amplio movimiento popular, aunque con débil dirección política del campo de la izquierda, había logrado con el paro del 19 de julio imponer su presencia en escena.

La respuesta desesperada a esta histórica gesta popular, conducida principalmente por las dirigencias sindicales, de nítido dominio de las izquierdas, será la autorización gubernamental para el despido de las dirigencias sindicales de todo el país. Esta circunstancia va a ser aprovechada por la burguesía industrial, el comercio, la banca y todos los sectores de la producción y de servicios para proceder al despido. La inviabilidad para su posterior reposición al puesto de trabajo creó las condiciones materiales (en tanto muchos de estos dirigentes consideraron que se habían cerrados los canales democráticos de protesta popular) para la radicalización de sus posiciones rompiendo con el sistema; buscando alternativas en acciones no tradicionales de tipo

democrático; abonando en contingentes de hombres a las agrupaciones políticas que se habían alzado en armas en esa década: el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru y el Partido Comunista (que años después se le conocerá como Sendero Luminoso y finalmente como Sendero). Regresemos a lo del cronograma. El cronograma de salida fue tarea compleja y así lo comprendió el sector empresarial como el político. Con el establecimiento del cronograma de la transferencia del poder a los "civiles" el gobierno del general Morales Bermúdez buscaba, en realidad, un repliegue ordenado, viable y honroso de los militares a sus cuarteles. Las Fuerzas Armadas no querían correr riesgos innecesarios. Sin embargo, era ya un riesgo abrir el escenario electoral en medio de la dictadura y de una crisis social de enormes proporciones, superior a la dimensión de la crisis económica. Morales Bermúdez apelaba con frecuencia a la analogía de la transferencia como un puente frágil que se podía romper si se le cargaba con el peso excesivo de las movilizaciones sociales. Éstas, sin embargo, se intensificaron mediante las huelgas y paros regionales y nacionales impulsados por la izquierda al interior del movimiento obrero, en respuesta al ataque frontal abierto por el gobierno.

Con el proceso de la transferencia del poder a los "civiles" [¿qué civiles?], la izquierda parlamentaria y la izquierda radical salieron del terreno sindical para entrar a la escena política. Ese tránsito tuvo muchas ambigüedades, contradicciones y desgarramientos. La mayoría de los líderes de la izquierda pensaron que salir del espacio sindical era abandonar la lucha directa de las masas que conducía a la revolución para caer en la trampa de la dictadura militar. La convocatoria a elecciones y la transferencia de poder a los civiles eran una maniobra de la dictadura para sacar a las masas y a sus vanguardias de la lucha directa. Surgieron entonces dos posiciones en el seno de la izquierda: la

táctica de la abstención electoral y la participación. El primer camino, escogido por Patria Roja, Sendero Luminoso y otros grupos menores, conducía a la confrontación abierta. El segundo, seguido por las fuerzas políticas restantes, constituyó la incursión democratizadora de las clases populares y de la mayoría de la izquierda electoral (democrática) en el Estado.

Las grandes movilizaciones de masas y la apertura democrática contribuyeron a la unificación de la izquierda legal (democrática) dispersa en diversos frentes políticos: el UNIR, el FOCEP, la UDP, la Unidad de izquierda, etc. Se iniciaba de ese modo la reversión de la división de la izquierda predominante en la década del 60, por un lado y la radicalización de otro sector de la misma en tanto no creyeron en el camino democrático de las elecciones.

La coyuntura de fines de los 70. La Constituyente. La nueva Constitución. Las elecciones de 1980

En ese escenario, expuesto precedentemente, se dieron las elecciones de 1980. Los resultados electorales mostraron un nuevo mapa electoral en el país. Por primera vez las izquierdas tenían un peso electoral (36,25%) mayor que la derecha expresadas en el PPC (23,78%) y casi igual al del APRA (35,34%).²⁷⁹ En el campo de la izquierda los sectores radicales tenían una gravitación electoral mayor que los sectores moderados. Los resultados electorales cambiaban los términos de la lucha política establecidos por la dictadura del general Morales Bermúdez: de negociación con los sectores empresariales y con los partidos de derecha y el APRA, y de confrontación con los excluidos movimientos

²⁷⁹ PEASE GARCÍA, Henry. *Los caminos del poder oligárquico*. Lima, Desco, 1977.

populares clasistas y de la izquierda. En adelante, esa confrontación ya no se desarrollaría entre el Estado y los movimientos populares fuera del Estado sino que se realizaría dentro del mismo Estado, esto es, se procesaría en términos institucionales. De esta manera se ensanchaba — se argumentaba— el campo de la democracia y se reducía el espacio de la confrontación abierta. El inicio de la transferencia se dio con la convocatoria y la posterior implementación de una Asamblea Constituyente cuyo objetivo fue dotar al país de una nueva constitución que sirviera de puente al surgimiento de un nuevo Estado. Pero los sectores de la izquierda en la Asamblea Constituyente insistieron en la confrontación abierta definiendo a ésta como una caja de resonancia de las “luchas directas”, vale decir los paros y las huelgas, de las masas.

El APRA y el PPC en cambio concentraron esfuerzos para sacar la Asamblea Constituyente adelante y establecieron puentes con el gobierno de facto para administrar y hacer más llevaderas las tensiones inevitables entre los dos poderes existentes entre 1978 y 1980. En el ínterin cada poder se dedicó a lo suyo. Los constituyentes a elaborar la nueva constitución y el gobierno militar a preparar su repliegue ordenado y a organizar en secreto un conjunto de normas que tienen que ver con la Defensa Nacional.²⁸⁰

Se estableció una suerte de división del trabajo normativo entre la Asamblea Constituyente y la dictadura militar. Un gran trecho de la coyuntura de la Asamblea Constituyente se superpuso con la coyuntura de las elecciones generales de 1980. Al espectro de las fuerzas políticas de la Asamblea Constituyente se sumó Acción Popular presentándose como el partido que no sólo había sido víctima de la dictadura militar

²⁸⁰ Ésta será la demostración de que el proyecto reformista y la contrarreforma militar no respondieron nunca a los intereses del país, sino a la seguridad continental en lucha contra el comunismo internacional: es época de la evaluación de la derrota en la guerra de Vietnam del ejército americano. Antes [en los 50] lo habían sido los franceses. Por tanto, la seguridad continental y nacional fue siempre la prioridad.

(1968) sino que también había desarrollado una oposición consecuente sin contaminaciones ni compromisos. Esperaba de ese modo sacar provecho del estado de ánimo antidictatorial del país y de la fragmentación de la izquierda que había fracasado en sus intentos de construir un frente unido —la Alianza Revolucionaria de Izquierda (ARI)— y de presentarse al país como una alternativa viable y real de poder. El Partido Popular Cristiano vio reducida su votación en la Asamblea Constituyente a sus dimensiones reales debido a la participación de Acción Popular. Al igual que el APRA tuvo que pagar los costos de sus compromisos a través de la Asamblea Constituyente con un gobierno dictatorial desgastado y antipopular.

Pero fue el APRA, que aparecía como el favorito de la contienda electoral y del gobierno militar, el que sufrió el peso mayor de la derrota electoral no sólo por errores tácticos de su candidato presidencial y de las desavenencias internas del APRA sino también debido a sus compromisos con la dictadura. Los resultados electorales de 1980 permitieron a la derecha política y a las capas empresariales a ella vinculadas superar el trauma velasquista y populista y abrieron la posibilidad para que ellas organizaran su dominio con un proyecto neoliberal y conservador sobre la base de la derrota de las clases populares y de sus representantes políticos.²⁸¹

²⁸¹ NEIRA, *op. cit.*, parte III, pp. 421 ss: "Velasquismo, cuando los generales y los intelectuales se encuentran".

La década del 80. Los gobiernos de Acción Popular (1980-1985) y el APRA (1985-1990). El Fondo Monetario Internacional

La década del 80 fue el decenio del fin del velasquismo; significó el retorno conservador de Fernando Belaúnde a la presidencia en 1980; pero no regresó el viejo orden, el Estado no se desprendió de las empresas públicas ni la tierra fue devuelta a los antiguos latifundistas. Fue sorpresa la supervivencia del aprismo a la desaparición del fundador, la aceptación de la democracia por una izquierda legal que la asume en tanto que una nueva forma de militancia. Sorpresa el “fenómeno” Alan García, el “fenómeno” Vargas Llosa, el “fenómeno” Fujimori. Qué sorpresa, qué fenómeno; el Imperio había decidido que había llegado la hora para cambiar a los viejos partidos como aliados tradicionales en el control de los países coloniales, semicoloniales o neocoloniales. Estos partidos habían demostrado ineficiencia, en el manejo de la cosa pública, ineficiencia en la política de aplicación de métodos económicos que aperturen, amplíen o vinculen de mejor manera el mercado nacional a los productos de exportación, necesario para la reactivación del aparato productivo del imperio.

Las burocracias gubernamentales durante todo el periodo del Estado de Bienestar habían sido incapaces de ser eficiente en el manejo del Estado, se había incrementado la burocracia hasta el tremendismo en el aparato estatal, las políticas proteccionistas constituían impedimentos reales para la ampliación de las nuevas políticas neoliberales. Había que terminar con el estatismo que ahogaba las iniciativas del sector privado que alentaba una economía de mercado. La partidocracia tenía

necesariamente que ser cambiada, el proceso no podía ser brutal, se tenía que contar con aliados incondicionales. Belaúnde lo fue.

En Wáshington había ingresado a la Casa Blanca un nuevo inquilino, se inauguraba una nueva doctrina en todos los frentes: el neoliberalismo, los *Chicago boys*, entraban a escena de manera abierta y predicaban su doctrina sin empacho en el ámbito global. Ya venían aplicando sus recetas macroeconómicas en Asia con los tigres asiáticos, bajo fuertes dictaduras o gobiernos fuertes, como los prefería llamar el buque insignia del Fondo Monetario Internacional, en el ámbito de las finanzas internacionales. Este modelo se aplicaba desde el golpe militar en 1973 en Chile donde para erradicar una corriente ideológica, según hoy sabemos, el presidente Nixon dijo a sus ayudantes que había que hacer gritar a la economía chilena, en abierta alusión de que el gobierno de Salvador Allende tenía que caer. La historia hoy es por todos conocida.

La ineficiencia en la política tenía que ser reemplazada por nuevas dirigencias que no tuvieran vinculaciones nefastas con el pasado oligárquico. Había llegado la hora de liquidar a los viejos partidos y la partidocracia, el caudillismo en América Latina, Perú no fue la excepción. Era la hora de los tecnócratas, de la eficacia y eficiencia en la gobernabilidad. Este modelo lo vamos a ver mejor durante el gobierno cívico-militar de los 90-2000. En esta década (80), la recesión de la economía mundial y el fin del crecimiento produjeron el incremento de la deuda externa, la irrupción de Sendero, el acoso de la violencia, la descomposición del tejido social, la pobreza masiva, la nueva delincuencia y la narcoeconomía. La guerra interna que dejaría miles de víctimas.²⁸² En pocos años el Perú se vuelve el país de todos los peligros.

²⁸² Los datos (de revistas, organizaciones de derechos humanos nacionales y extranjeras, periódicos independientes, cifras oficiales y extraoficiales) más conservadores nos demuestran que en la década de los 80 fueron más de 30 000 los muertos por ambos bandos.

El retorno de las instituciones democráticas coincidió con una degradación impresionante del nivel de vida acortando las expectativas no sólo de los sectores populares, sino de las capas medias y profesionales tan laboriosamente constituidas en los decenios precedentes del crecimiento moderado.

Una respuesta popular de los sectores desplazados de los resortes oficiales de la economía, en tanto no constituía sujetos de crédito para la sociedad oficial o la economía formal, produjo en los desocupados una expansión de lo que se ha dado en denominar la economía informal,²⁸³ inesperado balón de oxígeno; reemplazó el espacio de la economía asalariada que se redujo aterra-doramente, y los que tenían empleo seguro, los formales, pasaron de un 35% de la PEA en 1981 a un 10% en 1992. Es un tiempo de paradojas, de crisis y democracia, de debilidad del Estado y de iniciativa popular para lograr sobrevivir.

Los ochenta es el período de la inflación galopante, tanto o más que los años treinta, un tiempo excepcional, uno de esos momentos de ruptura y continuidad en la historia de los peruanos. Además en este período se acumuló y condensó un conjunto de crisis que pusieron en cuestión la viabilidad del Perú como nación.²⁸⁴

²⁸³ Véase DE SOTO, Hernando. *El otro sendero*. 8.ª edición, Lima, Instituto Libertad y Democracia, prólogo de Mario Vargas Llosa, 1990. En el prólogo a este libro Mario Vargas Llosa, quien se convirtió en uno de los fundamentalistas más connotados en América Latina y en el Perú del neoliberalismo, sobre la economía informal, dirá: "No deja ser una paradoja que este libro, escrito por un defensor de la libertad económica, constituya una requisitoria contra la *ineptitud* y la naturaleza discriminatoria del Estado en el Tercer Mundo que en su severidad y contundencia no tiene acaso parangón y, por ejemplo, reduce a meros desplantes retóricos buena parte de las críticas radicales o marxistas publicadas en nuestros días sobre la condición del mundo subdesarrollado. Cuando la legalidad es un privilegio al que sólo se accede mediante el poder económico y político, a las clases populares no les queda otra alternativa que la ilegalidad". *Ibid.*, p. XX.

²⁸⁴ Hasta este período la dirigencia política descendientes de la revolución del XIX, por las razones expuestas en la I parte de este trabajo, todavía no ha sido capaz de construir un Estado-Nación en el vasto territorio llamado Perú. Ha sido incapaz de convertirse en clase dirigente, en tanto no ha podido construir una economía independiente. Ésta es la tragedia. Los intentos de crecimiento y desarrollo han estado orientados más por los requerimientos externos del nuevo imperio que por las necesidades de un desarrollo autóctono con un espíritu capitalista en el vasto territorio peruano. Por eso afirmamos que conviven varias naciones, muchas etnias, que inviabilizan un Estado Unitario, centralizado y nacional.

El agotamiento de la industrialización substitutiva de importaciones como modelo de acumulación y de desarrollo,²⁸⁵ la acumulación de la riqueza en pocas manos y el crecimiento vertiginoso de la masa de desempleados y subempleados, la informalización creciente de las clases medias y populares, la crisis orgánica de los partidos, la militarización de la política, el derrumbe del Estado, el conjunto de estos problemas críticos se expresará en el campo de la política y asumió la forma de una crisis orgánica de dirección y representación. Producidas las elecciones, Belaúnde retomó el poder en 1980 y continuó con mayor decisión el ciclo de liberalización económica iniciado en 1976.

Durante los dos primeros años de su gobierno aplicó un populismo que le permitió elevar su popularidad al 62% de la aceptación ciudadana. Para mantener buenas relaciones con la banca internacional aceptó las cartas de intención del FMI y se propuso pagar la deuda en un monto que comprometía alrededor del 50% de los ingresos fiscales, limitando

²⁸⁵ Hay que tener presente que el concepto de desarrollo alcanzó su punto más radical y al mismo tiempo más divulgado, al decir de Theotonio Dos Santos, con la obra de W. W. Rostow en la década de los 60. Él ya había publicado en los 50 su libro *Un manifiesto anticomunista* en el cual "Trataba de demostrar que el inicio del desarrollo no dependía de un Estado revolucionario como había sucedido en la URSS y sí, de un conjunto de medidas económicas tomadas por cualquier Estado Nacional que asumiera una ideología desarrollista. En un libro posterior menos divulgado, Rostow defendía la necesidad de que este Estado desarrollista fuese un *Estado fuerte* (así lo requieren los organismo internacionales como el Banco Mundial, El Fondo Monetario Internacional, El Banco Interamericano de Desarrollo). Sus trabajos como consultor de la CIA fueron unas de las principales referencias de las políticas de golpes de Estado modernizadores llevados a cabo en las décadas del 60 y 70 a partir del golpe brasileño de 1964.... A pesar del primitivismo este modelo prevalece en la cabeza de los "científicos sociales". DOS SANTOS, Theotonio. "La teoría de la dependencia un balance histórico y teórico". En Theotonio Dos Santos, *Los retos de la globalización, ensayos en homenaje a Theotonio Dos Santos*. Volumen I, 2.ª edición, Unesco-Caracas, Perú Mundo, Instituto de Investigaciones Sociales, Francisco López Zegarra (Edit.), pp. 98, 1999. Sobre la teoría de la dependencia el mismo autor, quien es uno de sus fundadores, dirá que es el "esfuerzo crítico para comprender la limitación de un desarrollo iniciado en un período histórico en el cual la economía mundial ya había sido constituida bajo hegemonía de grandes grupos económicos y poderosas fuerzas imperiales, aun cuando una parte de estas entraba en crisis abriendo la oportunidad para el desarrollo del proceso de descolonización". *Ibid.*, pp. 103-104.

En esta misma obra de dos volúmenes se encuentran los trabajos más recientes sobre dependencia y desarrollo, éstos son: VALENZUELA, José. "Acumulación, productividad y plusvalía extraordinaria". En DOS SANTOS, Theotonio. *Los retos de la globalización, ensayos en homenaje a Theotonio Dos Santos*. Volumen I, 2.ª edición, Unesco-Caracas, Perú Mundo, Instituto de Investigaciones Sociales, Francisco López Zegarra (Edit.), p. 567 ss, 1999. ALVATER, Elmar. "Obstáculos en la trayectoria del desarrollo". En DOS SANTOS, *op. cit.*, p. 599 ss. BAMBIRRA, Vania, "Éxodo rural y éxodo urbano. La lucha por la reforma agraria en el Brasil". En DOS SANTOS, *op. cit.*, pp. 615 ss. GONCALVES, Reynaldo. "Globalización productiva, inversión externa directa y empresas transnacionales en el Brasil: Una perspectiva histórica". En DOS SANTOS, *op. cit.*, p. 635 ss. MÜLLER-PLANTENBERG, Urs. "Lo que todavía puede esperarse de las multinacionales". En DOS SANTOS, *op. cit.*, pp. 663 ss.

drásticamente la atención de las necesidades sociales; hasta que se produjo la crisis fiscal, la cual fue incrementada por los desastres del norte del país en 1983, que impidió continuar pagando la deuda y que agravó la inflación y la recesión generadas por la liberalización y privatización de la economía. La política de concertación propugnada por el ministro de trabajo no prosperó porque chocaba con la política liberal del Ministerio de Economía. En mayo de 1980 se inició la guerra de Sendero Luminoso con la quema simbólica de las ánforas en la comunidad de Chuschi, Ayacucho. Había decidido abandonar las aulas universitarias de Huamanga en las que se formó²⁸⁶ para “iniciar la guerra popular del campo a la ciudad”.

En un primer momento su accionar se limitó al departamento de Ayacucho en donde su presencia fue creciendo a medida que demostraba su debilidad el Estado en esa región. Entre 1983 y 1985 sendero amplió su accionar a otros departamentos del territorio nacional como resultado de la ofensiva militar y entre 1985 y 1990 consolidó algunos escenarios de guerra que arrinconaron cada vez más a la política y a los políticos afincados en la democracia. Su crecimiento tiene que ver no sólo con la ofensiva militar de 1983 que los sacó de Ayacucho a otros lugares del país, sino también con la crisis económica y fiscal que redujo el mercado debilitando más aún al Estado y expandieron por eso mismo sus espacios geográficos y sociales de acción.

Uno de los problemas que desgastó al gobierno del arquitecto Belaúnde y a la política general fue el accionar de los actos terroristas provenientes del grupo alzado en armas, que luego se le conocerá

²⁸⁶ DEGREGORI, Carlos Iván. *El surgimiento de Sendero Luminoso: Ayacucho 1969-1979*. Lima, Instituto de Estudios Peruanos (IEP), 1990.

como Sendero. Subvalorado en un primer momento, no sólo por el gobierno, lo enfrentó con las Fuerzas Armadas luego de resistir su intervención a fines de 1982. Desde entonces las FF. AA., siguiendo la doctrina de la Seguridad Nacional que privilegia los aspectos militares²⁸⁷ y que identifica las protestas sociales con el comunismo como enemigo interno, aplicaron una estrategia militar que, además de violar los derechos humanos no tuvo éxito: “Un comando conjunto timorato, atravesado por múltiples contradicciones y al vaivén de las correlaciones políticas del país; unas fuerzas policiales en repliegue y principales partidos en el Congreso, completan el marco en que se producía la respuesta estatal a la insurgencia senderista”.²⁸⁸

El APRA de los 80 era un partido populista cuyas banderas reformistas había abandonado debido a sus alianzas y compromisos con la oligarquía en las décadas del 50 y del 60 y cuya capacidad para volver a enarbolarlas se vio limitada porque Velasco realizó los sueños del populismo reformista en la década del 70. En los 80 vivió la prueba de fuego este partido, ya sin su jefe carismático, luego de la muerte de Haya. Para ponerse de acuerdo con los tiempos y poder competir tanto con la derecha como con la izquierda, el APRA intentó modernizarse y democratizarse bajo una nueva generación liderada por Alan García Pérez. Una vez que ganó las elecciones, Alan García reforzó su imagen de caudillo carismático pretendiendo ocupar el vacío dejado por Haya. Se produjeron entonces las tensiones inevitables entre Alan García y la institucionalidad partidaria, las mismas que marcaron la dinámica del APRA y del gobierno entre 1985 y 1990.

²⁸⁷ Doctrina contrainsurgente aprendida por los militares peruanos que fueron educados en la Escuela de las Américas de los Estados Unidos de América ahí y en Panamá.

²⁸⁸ TAPIA, Carlos. *Las Fuerzas Armadas y Sendero Luminoso. Dos estrategias y un final*. 1.ª edición, Lima, Instituto de Estudios Peruanos (IEP), 1997.

La limitación del pago de la deuda externa al 10% del valor de las exportaciones permitió cierto respiro a las finanzas públicas y elevó la popularidad de Alan García hasta aproximarse a los linderos de la unanimidad (95%). La política basada en la reactivación de la demanda y en políticas expansivas y populistas del Estado tuvo cierto éxito hasta que mostró su límite por el lado del cuello de botella de falta de divisas requeridas por la industria reactivada. A partir de 1988 tuvo que aplicar las políticas de estabilización exigidas por el Fondo Monetario Internacional y por la derecha y al final de su gobierno quiso volver a la aplicación de políticas populistas dilapidando los pocos dólares que el BCR había logrado reclutar por mejora de las exportaciones. La consecuencia de esta política de dispendio nos llevó a una inflación galopante que crecía a niveles siderales, la popularidad de Alan García decrecía a niveles (9% en 1989) que pusieron en cuestión la legitimidad de su gobierno. Comenzó a auspiciar destacamentos paramilitares desde el Ministerio del Interior para liquidar y/o sacar fuera de carrera a la oposición de derecha o de izquierda que ante la conyuntura, si bien no se habían aliado, cada lado (al sentirse afectados directamente por esta política de dispendio de Alan) realizaban acciones de resistencia o de crítica a la labor gubernamental.²⁸⁹

Durante el gobierno de Alan García se inició la superposición entre la guerra y la política. Es cuando Sendero Luminoso decidió entrar a la lucha social y a pelear un lugar en la opinión pública; el APRA y las fuerzas policiales decidieron organizar comandos paramilitares.²⁹⁰ Se

²⁸⁹ Estos comandos, a semejanza de las Triple AAA (Alianza Anticomunista Argentinas), tomaron el nombre de un líder aprista, Rodrigo Franco, fallecido en circunstancias no esclarecidas por el Gobierno de Alan García. Los investigadores de la revista *Gente* habían llegado a la presunción de que su muerte fue decidida en la esfera gubernamental, según todas las pruebas indiciarias que ellos poseían. La muerte de este líder aprista beneficiaba a Alan García y a su entorno, pues el dirigente iba a denunciar la corrupción en el ámbito gubernamental.

²⁹⁰ Hoy se sabe que fueron creación del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Esto constituyó el inicio de la guerra sucia abierta a partir del Estado; se comenzó a implementar un terrorismo de Estado institucionalizado,

consolidaron los escenarios de la guerra en la cual el senderismo mostró mayor capacidad militar y de enfrentamiento ampliándose las zonas de emergencia en el territorio nacional. En otras palabras, se amplió la guerra y la política se redujo hasta poner en cuestión sus propios canales y mecanismos de acción y de representación.

Al comienzo de su gobierno Alan García intentó una nueva estrategia basada en el desarrollo microrregional y en la guerra, pero —según dijo— “respetando los derechos humanos”. Para demostrarlo destituyó a algunos altos mandos militares acusados de violar los derechos humanos. Posteriormente, el gobierno sucumbió ante la lógica de guerra sucia, uno de cuyos hitos fue la masacre de los penales en junio de 1986. Recordemos que con la masacre de casi trescientos inculcados por terrorismo en los penales de Lima el 18 y 19 de junio de 1986 y su famosa frase:

“O se van ellos (los responsables de la matanza) o me voy yo”.

En realidad nadie se fue. Se deslegitimó totalmente el discurso del gobierno en defensa de los derechos humanos. Un mito que se desmorona con Alan García es el de unas élites financieras dispuestas al desarrollo, lo que conduce al tema de “los doce apóstoles” y a la confiscación de la banca privada. En pleno ensayo desarrollista Alan García va a negociar con los grupos económicos más importantes, los llamados “doce apóstoles”.

En palacio, en plena euforia del minicrecimiento, se había montado una sala de computadoras (ordenadores) y un equipo de técnicos. Una buena mañana las máquinas comenzaron a dar unos datos financieros

con manifiesta impunidad. Ninguno de sus autores que se sepa ha sido juzgado. Esta manifiesta impunidad va a persistir durante el Gobierno de Fujimori.

absolutamente descorazonadores; los capitalistas locales, no sólo los doce sino “los setenta y dos”, grupos engraidos del régimen, todo el sistema financiero-industrial beneficiado por el auge de la demanda interna, auge que costaba al país sus reservas, no estaban invirtiendo como se esperaba, sino que de acuerdo a viejas tácticas y esquemas fraudulentos propios desinvertían. Mientras tanto los recursos expatriados, unos 5 mil millones de dólares, se depositaban en la banca norteamericana. Con un sector de clase así el crecimiento por demanda era imposible. Sintiendo engañado Alan decidió la expropiación de la Banca; se hizo con resultados extraordinarios y azarosos.

Los propietarios de tierras se habían tendido ante el rodillo compresor del velasquismo cuando aquél hizo la reforma agraria; pero los dueños del dinero no —estaba tocando el espinazo del capitalismo, el capital bancario-financiero internacional aliado de los banqueros peruanos, sus aliados locales. Eso explica por qué salieron a pelear y ganaron. Tocó el lado más sensitivo del capitalismo nativo dependiente, el que estaba ligado Alan se equivocó al capital financiero internacional. Era la fibra neurálgica del control de la economía nacional y mundial o global. Los dueños del dinero no eran peruanos, sus verdaderos dueños estaban ubicados en las bolsas de valores de Nueva York, Londres, París, Tokio, entre otros.

Un marco de ideas diferentes esperaba la ocasión para saltar a la arena política. Esto ocurre cuando los tanques, como en los buenos tiempos del militarismo velasquista, derriban una de las puertas del Banco de Crédito produciéndose así la inmensa explosión de descontento de los sectores afectados que comienzan a articular su protesta y resistencia a la decisión gubernamental; lo hicieron financiando la “movilización” de amplios sectores populares en la histórica Plaza San Martín, en julio de

1987. Ese día con su discurso de fondo se produjo el lanzamiento de Vargas Llosa como opositor a Alan García. Vargas Llosa fundó el Movimiento LIBERTAD el cual lo postuló como candidato presidencial en las elecciones de 1990... y lo que siguió fue la victoria de Alberto Fujimori, por las torpezas políticas de aquél. Además, porque demostró que era un miembro (con cara nueva) de la vieja oligarquía que resucitaba remozada y con un lenguaje (acorde con los tiempos) neoliberal, ya no como latifundistas, sino como banqueros y financieros. Eran tiempos del neoliberalismo, no podían darse el lujo que el pueblo habiéndolo identificado como tal, fuera capaz de rebelarse con consecuencias imprevisibles.

Para entonces, no había sido sólo la polarización social ni las iras incontroladas de las masas las que erosionaron al Estado, y muy concretamente al gobierno de Alan García Pérez sino, también, la caída vertical de los ingresos fiscales. "En 1989 la presión tributaria representó un 5% del producto bruto interno, frente al 9% observado en 1988. Si se observa la revolución de los ingresos tributarios, puede verse que en 1989 éstos representaron sólo un 30% de lo recaudado en 1985".²⁹¹ No sólo fue la política sino la economía la que había corroído y debilitado los muros estatales. La crisis fiscal impactó en varios niveles la estructura del Estado. En primer impacto fue institucional. La crisis fiscal, incapacitó a las instituciones estatales para atender las necesidades sociales de educación, salud, vivienda y para hacer los gastos mínimos de capital y de promoción de las inversiones en infraestructura, y, por otro, empobreció y generalizó el malestar en la burocracia estatal.

²⁹¹ PAREDES, Carlos y Jeffrey Sachs. *Estabilización y crecimiento en el Perú, una propuesta independiente*. Lima, Grade and the Brookings Institution, 1990.

La crisis fiscal tocó también las puertas de los cuarteles y las comisarías. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se vieron frecuentemente en problemas para movilizar en esa década su maquinaria represiva y para renovar sus equipos, pese a que seguían llevándose la parte del león en el reparto de la torta fiscal.²⁹² El segundo nivel fue político. Al desmoronarse las instituciones estatales, la crisis fiscal corroyó los cimientos del puente institucional que el Estado había tendido en las tres últimas décadas hacia la sociedad para reducir la brecha histórica que ha separado a los sectores de clase en el poder con los que no lo han detentado nunca, desde la conquista española. La crisis de los aparatos hegemónicos y económico-administrativos bloquearon la poca capacidad de legitimidad que el Estado y los gobiernos tenían, especialmente en los períodos de aguda crisis económica.

En estas circunstancias el discurso y la práctica estatales perdieron credibilidad y eficacia y exacerbaron más bien el descontento de la sociedad. Ésta no encontraba razones valederas para obedecer cuando los gobernantes fallan y son incapaces de satisfacer siquiera parcialmente sus expectativas. La situación se agravó cuando estas expectativas fueron crecientes y la capacidad estatal para atenderlas era decreciente. Se produjo, en consecuencia, una crisis de gobernabilidad y de inestabilidad política de diverso alcance. En unos casos afectó sólo al gobierno, en otros alcanza al régimen político y en ciertas situaciones, como en el caso peruano de la década del 80, llegó a los cimientos mismos del Estado. La crisis de los aparatos coercitivos del Estado —producto no sólo de la crisis fiscal sino también de la violencia política— tocó los puntos neurálgicos del orden social y el ámbito

²⁹² Actualidad Económica. Febrero, N.º 113, Lima, CEDAL, 1990.

jurisdiccional en donde impera el Estado. Éste dejó de imponer su autoridad en algunos lugares del territorio nacional, especialmente en las zonas abandonadas y en las zonas “liberadas” por Sendero Luminoso.

Pese a la coexistencia de estas diversas crisis de legitimidad, de gobernabilidad y de jurisdicción territorial la situación no llegó a ser revolucionaria, sino que tuvo que ver más con las peculiaridades de la crisis de la sociedad que con la crisis del Estado. La crisis social generó más un proceso de disgregación que de polarización y de confrontación social. El tercer nivel es propiamente estatal, y tiene que ver con el sistema institucionalizado de dominación social. La crisis fiscal desmoronó las formas más modernas de dominación de las décadas del 60 y del 70 para reabrir el paso a las formas tradicionales basadas en el patrimonialismo, la clientela y la prebenda. La modernización y la institucionalización del Estado cedieron su lugar, en este período, a formas tradicionales de dominación que se habían resignado a asumir un papel subordinado.

Pese a la crisis fiscal el Estado seguía subsidiando a la empresa privada con exoneraciones tributarias, los precios de los bienes y servicios de las empresas públicas, el Certex se mantuvieron agravando la crisis. En el lenguaje de los apóstoles del neoliberalismo, el Estado había demostrado ser ineficiente en la solución de los problemas neurálgicos de la sociedad: empleo, bienestar, crecimiento económico, entre otros grandes objetivos. Los burócratas del llamado Estado benefactor para estos apocalípticos demostraron ser malos administradores de la cosa pública, que los había llevado a niveles de gigantismo burocrático; el intervencionismo estatal en la economía era un freno a la libertad de empresa, la iniciativa y competencia del sector privado. Había que reducir el Estado a la mínima expresión. La crisis cerró el ciclo estatista. El

estado de bienestar social —si en algún momento hubo—, estaba llegando a su fin. Estaban dadas las condiciones favorables para la implantación de una economía libre de mercado y un Estado neoliberal, que será el nuevo fantasma que recorre el mundo. Su ingreso al Perú no fue una excepción.

Crisis del modelo desarrollista

La crisis de la economía peruana no se caracterizaba sólo por la hiperinflación y la drástica recesión, sino también por el agotamiento de un modelo de desarrollo que desde los años 50 estaba presente en el aparato productivo. El rasgo más destacado de la economía peruana de esos años fue su estancamiento. Entre 1974 y 1988 la economía peruana creció a una tasa promedio de 1,5% frente al 4,2% del período 1950-1988, lo que fue a todas luces insuficiente si se toma en cuenta el crecimiento de la población, que fluctuaba alrededor de una tasa de 2,5% en el mismo período.²⁹³ El sector económico más golpeado fue precisamente aquél que orientó el desarrollo desde los años 50 en adelante: la industria substitutiva de importaciones.

La tasa de crecimiento industrial descendió del 6,86% en el período 1950-1967, al 4,08% entre 1967-1974 y al 0,95% entre 1974-1988. La minería, en cambio, bajó su tasa de crecimiento de 6,39% a 2,03% y a 3,79% en los mismos períodos. La agricultura, declinante desde los años 50 fue, sin embargo, la que menos impacto sufrió en estos años de aguda crisis económica. Su descenso fue muy lento: de 2,39% a 1,91% y a 1,61% para los mismos períodos señalados.²⁹⁴ El descenso vertical del

²⁹³ *Op. cit.*

²⁹⁴ *Ibíd.*

crecimiento económico y la virtual parálisis y quiebra del sector industrial tienen que ver con el freno de la inversión extranjera y la inversión pública. La inversión privada sólo fue significativa en el período 1968-1987, la inversión privada apenas llegó al 8% del PBI.²⁹⁵ La inversión extranjera como motor del desarrollo económico se apagó en la práctica para el Perú de la década del 80. La incapacidad de pagar la deuda a partir de 1983, la reducción del pago al 10% en 1985 y la declaración del Perú como país inelegible después, cortaron toda posibilidad de préstamos y de inversiones directas extranjeras.

Dentro del descenso general de la inversión directa extranjera en América Latina, el Perú fue el más perjudicado: la inversión directa extranjera creció en 38% entre 1980 y 1988, cifra claramente inferior a la de Colombia(208%), Venezuela(45%), Ecuador (43%) y Bolivia (44,3%). Esos exiguos flujos de capital extranjero se habían concentrado en los sectores tradicionales de la economía (comercio, seguros y transportes) y en menor medida en la minería y en la industria, sectores estos últimos en donde aún se concentra el mayor porcentaje del *stock* total del capital externo.²⁹⁶ El Estado en la década del 80 había dejado de ser no sólo el motor del desarrollo y de la inversión sino que había perdido su capacidad de gestión macroeconómica, especialmente en 1989 y en la primera mitad de 1990, tiempos de caos y de ingobernabilidad económica. Entre 1984 y 1988 la inversión pública llegó al 5,8% del PBI porcentaje inferior al alcanzado entre 1971 y 1983: 7,2%.

Esta parálisis de la economía y del sector industrial en especial no hay que buscarla sólo en el cese del funcionamiento de los motores que los habían impulsado (el capital extranjero y la inversión pública), sino

²⁹⁵ *Ibid.*

²⁹⁶ *EFICACIA*. Julio, N.º 57, Lima, 1990.

también en las características mismas de la industria substitutiva de importaciones. En la medida en que su dinámica se apoyó no en los sectores primarios internos de la economía, ni en un sector poderoso de bienes de capital que habían sido incapaces de generar, sino en el sector exportador cada vez más vulnerable. Debido a esto el desarrollo de la industria no tenía bases sólidas y estables; en ese sentido la crisis y el estancamiento constituyeron una amenaza permanente.²⁹⁷ En la explicación de la parálisis industrial no hay que dejar de lado las políticas de ajuste que, al reducir el salario real y el mercado, agravaron la recesión y la crisis.

El debilitamiento de la sociedad civil

La capacidad de asociación voluntaria de los grupos y las clases sociales entraron, también, en crisis. El desencanto llegó también a la sociedad civil que no sólo vio frenada su fase expansiva de los 60 y los 70,²⁹⁸ sino que en la década del 80 esta fase retrocedió. El movimiento gremial sindical fue el más afectado por la crisis económica. Sus efectos corrosivos en el sector obrero tenían dimensiones catastróficas: reducción drástica del contingente obrero y de sus organizaciones. Muchos sindicatos, gremios y asociaciones de productores han desaparecido con la quiebra de sus empresas y centros de trabajo. Otras subsistieron, pero sin vitalidad: sus asociados participaban cada vez menos. Les

²⁹⁷ Durante todo el periodo republicano, como hemos venido diciendo, reiteradamente, en Perú no existió un modelo de desarrollo de las fuerzas productivas, con un capitalismo autónomo y propio. No hemos generado una industria pesada, o ligera, dirigida a un mercado interno nacional. Nuestro diseño siempre ha estado dirigido macroeconómicamente para la exportación y según los requerimientos del gran capital financiero internacional y de las grandes potencias industrializadas inviabilizando de ese modo un desarrollo autónomo y sostenido. Desde este punto de vista hemos sido incapaces de constituir una burguesía nacional capaz de llevar adelante un proyecto nacional.

²⁹⁸ LÓPEZ, Sinesio. "La sociedad civil como respuesta a la crisis y a la guerra". En *Seminario sobre el fortalecimiento de la sociedad civil y la consolidación de la democracia*. Lima, Instituto de Estudios Peruanos (IEP), 1989.

desanimó la poca eficacia reivindicativa de sus gremios en una situación de aguda crisis en donde no sólo estaba en cuestión el salario y las condiciones de trabajo, sino también el empleo y la existencia misma de sus centros de trabajo. Los gremios que habían logrado mantener cierta vigencia fueron aquellos que se ubicaron en los sectores de punta de la economía, en donde todavía funcionaban los esquemas de confrontación radical.

En general, en este período de capitalismo salvaje, en que todas las reglas de juego en el campo del Derecho del Trabajo fueron en beneficio de los empresarios privados, en la que no existió estabilidad de ningún tipo, los trabajadores y los gremios —en una economía de sobrevivencia—, llegaron al “convencimiento” de que obtenían más beneficios “negociando que confrontándose”.²⁹⁹ No hay que olvidar que es la época de la ola —era— neoliberal la economía macroeconómica del Estado, ésta no estaba dirigida a generar puestos de trabajo, sino fundamentalmente al pago de la deuda externa. En consecuencia, al escasear los puestos de trabajo e incrementarse la oferta de la mano de obra en el mercado, ésta no sólo será más barata sino que obtenido el puesto de trabajo y agobiado por su miseria, que lleva sobre su pelleja, el trabajador se someterá a las leyes del mercado. Aquí las leyes del mercado no ayudan a los sectores más afectados por el neoliberalismo, al contrario, las leyes del mercado, de oferta y demanda, nítidamente están al servicio del gran capital transnacional o global. Por otro lado, pese a que la inflación es menor en el campo que

²⁹⁹ BONIFAZ, Nora. *Rondas, Estado y política*. Lima, IDS, 1990. Aparecerá en el escenario una variante jurídica de métodos alternos de solución de conflictos jurídicos y fue —es— la mediación, la conciliación y el arbitraje. Medios de solución que en la sociedad neoliberal quedarán en manos de centros privados, inhibiéndose el Estado en gran medida de ser el *gran árbitro* en las disputas obrero-patronales. Estos métodos ahora se impulsan desde el Estado. Están tan de moda, pero que en el ámbito del derecho del trabajo y del derecho comercial son tan viejos como las relaciones mercantiles. Lo que hay que vigilar es que por esta vía se está privatizando la justicia administrativa y judicial del derecho del trabajo individual y colectivo, como de los clásicos derechos civil y penal.

en las ciudades, la crisis ha afectado, también, la densidad de las organizaciones campesinas.

El eje de las luchas campesinas³⁰⁰ en la década del 80 ha sido la obtención de una mejor ubicación en el mercado, poniendo en tensión la relación ciudad-campo que los gobiernos distendieron importando alimentos del exterior. La lucha por la tierra se redujo prácticamente a Puno donde las comunidades campesinas luchaban y lo siguen haciendo contra la gran propiedad que está en manos de empresas asociativas. La novedad de la década del 80 en el panorama rural fue la implantación de las zonas de emergencia, la creación y expansión de las rondas campesinas que se van a encargar del orden interno y la justicia, especialmente en la sierra norte del Perú.³⁰¹ Por asumir este rol a algunos dirigentes campesinos se les acusó de apoyar o de ser miembros de Sendero Luminoso. Los gremios profesionales de las clases medias también perdieron presencia e iniciativa. Hecho que aún subsiste. Su centralidad, que se expresaba en la Confederación Intersectorial de Profesionales Universitarios Liberales (CIPUL), ha desaparecido.

En realidad, casi todos los gremios han dispersado sus fuerzas y han perdido centralidad: la crisis económica y la aplicación de un modelo importado, a través de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Internacional que son los que diseñan vía memorándums las proyecciones macroeconómicas de nuestros países mediante asesorías impuestas son en gran medida la causa de esta dura realidad.³⁰² Una respuesta de emergencia y de sobrevivencia de los sectores pobres fue

³⁰⁰ Véase la nota anterior, el efecto del modelo neoliberal alcanza, por igual al campo, como a la ciudad. Esto explicaría la desmovilización, pérdida de objetivos estratégicos de este sector población y por lo tanto de su debilidad organizativa, por no decir, su total desmantelamiento.

³⁰¹ BONIFAZ, *op. cit.*

³⁰² Al final del milenio se ha comenzado a identificar a este organismo, así como a la Organización Mundial de Comercio, como instrumentos del imperialismo norteamericano responsables de los males de la sociedad occidental. Son ejemplos las movilizaciones que se han hecho en EE. UU. y en el resto del mundo.

la economía informal. Pese al crecimiento vertical de sus efectivos, el contingente de los informales no ha incrementado su capacidad de asociación en la misma proporción. Esto obedece quizá a su dispersión y fragmentación estructural. Hay, sin embargo, algunas excepciones como los comerciantes y los transportistas cuya ocupación favorece un alto grado de comunicación y de asociación, características que van a ser aprovechadas políticamente por el fujimorismo,³⁰³ y que favoreció el triunfo de Fujimori.

Es notorio, sin embargo, el impacto que el ajuste ha producido especialmente en estos grupos desactivándolos y dispersándolos: su ingreso dependía en gran medida del salario real de los trabajadores. Con altibajos que imprime la crisis económica y la crisis fiscal del Estado, las únicas organizaciones que crecieron y se fortalecieron fueron —aún lo son— las de sobrevivencia asistencial: el programa de vaso de leche, los comedores populares y las organizaciones vinculadas al Programa de Emergencia Social, organización que está orientada y dirigida desde el Estado y, por tanto, fuente del nuevo clientelaje político. El drástico programa³⁰⁴ de ajuste del 8 de agosto de 1990 generalizó en fábricas y pueblos jóvenes la práctica de la olla común.

En resumen, el desarrollo de la sociedad civil en la década del 80 se vio bloqueado por la crisis económica debilitó a la sociedad civil vía la reducción de disgregación del mercado. Son las organizaciones gremiales las que más se vieron afectadas por la inflación y la recesión. La violencia política puso en la línea de mira a los líderes de las organizaciones gremiales y políticas, destruyendo todo el tejido social, especialmente en las zonas de emergencia. Zona en la confluyó el

³⁰³ Un estudioso de este período la denominará fujimania. FRANCO, Carlos. *Reflexiones en torno a la fujimania*. Lima, Página Libre, 1990.

³⁰⁴ Que fue el mismo de Libertad y Democracia o del Movimiento Libertad o del que fue candidato presidencial Mario Vargas Llosa.

terrorismo subversivo y el terrorismo estatal que afectó a poblaciones campesinas íntegras, que se vieron obligadas a emigrar a otras tierras, hacia Lima, principalmente.

Acciones antisubversivas y el terrorismo de Estado. Los grupos insurgentes y el terrorismo

Uno de los rasgos distintivos de la década del 80 fue —ha sido—, sin duda, la violencia política que atravesó todas las relaciones de la vida social. Pero no es la insurrección, ni la guerrilla, ni una larga guerra que combina diversas formas de lucha militar, sino el terror que impusieron los actores de la guerra en el país. El terror es un dato básico del que no se puede prescindir si se quiere comprender la década crítica del 80. Por imponerlo compiten los diversos actores de la guerra de baja intensidad y por liberarse de él pugnaron las fuerzas sociales y políticas, y también la gente común y corriente.

El sentido y los alcances del terror dependían de los actores que lo ejercieron. Para el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) la violencia política era una respuesta de salida a la crisis del Perú de los 80. Para Sendero Luminoso, en cambio, la “guerra popular” era la respuesta al “carácter semicolonial y semifeudal” del Perú. Mientras el MRTA se movía en el corto y el mediano plazo, Sendero Luminoso no es la coyuntura crítica sino el largo plazo teniendo por objetivo central la estructura atrasada y maltrecha del país la que definía e impulsaba la violencia política. Más allá del sentido que los actores de la guerra buscaron imprimirle a sus acciones, no hay duda de que el terrorismo expresó una alternativa militar que compitió con las alternativas políticas en el escenario nacional.

En el Perú de los 80 coexistieron dos escenarios, el de la política y el de la guerra, cada uno de ellos con sus actores, sus proyectos y sus dinámicas propias. La relación entre esos escenarios fue cambiando a lo largo de la década del 80. Entre 1980 y 1985, la política y la guerra se desarrollaron en forma paralela con escasas o nulas relaciones entre ellas, salvo el hecho de que ambas coincidían en la lucha por el poder del Estado. El país se desplazaba de una coyuntura política a otra bélica o viceversa, dependiendo de la iniciativa y la fuerza de los actores en conflicto. Después de 1985 las fuerzas de la guerra, especialmente Sendero Luminoso, intentaron trasladar la guerra a la política y buscaron influir en la opinión pública, influenciando en un medio de comunicación masiva —de prensa— e imponerse en el movimiento sindical. Desde entonces el Perú asistió a la superposición de actores, escenas y tiempos de la guerra y de la política.

En mayo de 1980 Sendero Luminoso inició su autodenominada guerra popular con la quema de ánforas en la localidad de Chuschi. Nadie pudo imaginar entonces la hibridación que se produciría entre las acciones de Sendero y las múltiples crisis del Perú. Todas las fuerzas políticas subvaloraron tanto la audacia de Sendero Luminoso como la capacidad destructiva de la crisis. Nadie los veía como una fuerza capaz de conmocionar al país entero, ni en la crisis económica el agotamiento de la forma populista de desarrollo y de su sistema de dominación política y social.

Lo que hizo Sendero Luminoso, más allá de su ideología y de su voluntad explícita, fue sacar a la luz pública, nacional e internacional la discusión sobre el futuro de una sociedad determinada, en este caso: Perú una sociedad corroída y tambaleante con todavía rasgos semif feudales ad portas del siglo XXI. La crisis del populismo y de las

formas económicas, sociales, políticas y estatales que produjo, potenció la débil y limitada estrategia del senderismo. El senderismo encontró, en las condiciones deprimentes de la crisis macroeconómica, un terreno fértil para justificar “su guerra” y muy particularmente en las zonas marginales —aisladas de la llamada civilización occidental y cristiana— con débil integración al mercado y al Estado: La lógica de los 80 fue de retraimiento del mercado y con él, del Estado, y por lo mismo de expansión de los espacios sociales y geográficos disponibles para la actuación senderista. Ése era un lado de la crisis, pero el otro, y no menos importante, fue que sobre el fondo de una misma sociedad, que oscilaba entre el descontento y la desmoralización, los gobiernos y las Fuerzas Armadas se comprometieron en una dinámica de militarización del conflicto y de exacerbación del clima de violencia nacional.

En la lucha contra el terrorismo de Sendero Luminoso y del MRTA los gobiernos del presidente Belaúnde y de Alan García encargaron a las Fuerzas Armadas la solución del problema mediante comandos político-militares en las zonas de emergencia. Apoyándose en la doctrina de seguridad nacional las Fuerzas Armadas desataron una guerra interna de baja intensidad, indiscriminada que confundía a los civiles residentes en las zonas de emergencia con potenciales terroristas y a las protestas sociales con actos emparentados con el terror.³⁰⁵ Así, en las postrimerías del segundo gobierno de Belaúnde, el 5 de junio de 1985 se promulgó la ley 24150 donde se establecían las normas que debían cumplirse en los estados de excepción, se dejaba claro que en esos territorios las Fuerzas

³⁰⁵ Se había iniciado la guerra antisubversiva, había que quitar el agua a los peces, el método: el terror en la población para evitar que ésta se convirtiera a corto, mediano o largo plazo en fuente de abastecimiento de la subversión. Las Fuerzas Armadas estaban claras, quién era su enemigo y cómo enfrentarlo. Se había dado inicio a la guerra psicológica de tan nefastas consecuencias para los sectores poblacionales ubicados en la zona de guerra (de emergencia), que en este caso eran más de 2/3 de todo el territorio nacional. La conducción de la guerra va a estar a cargo de los jefes militares coordinados por el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) bajo el mando de un siniestro personaje llamado Vladimiro Montesinos, vinculado a los servicios de inteligencia norteamericano, muy particularmente a la Central de Inteligencia Americana (CIA).

Armadas (FF. AA.) asumían el control del orden interno. La ley precisaba las atribuciones del Comando Político Militar otorgándole la facultad de coordinar, supervisar y concertar las acciones con los organismos públicos y el sector privado concernientes al estado de emergencia.

Esta ley establecía asimismo: “la potestad de solicitar a los organismos competentes el cese, nombramiento o traslado de las autoridades políticas y administrativas de su jurisdicción en caso de negligencia, abandono, vacancia o impedimento para cumplir sus funciones”. El artículo 10.º Señalaba que: “los miembros de las FF. AA. o Fuerzas Policiales (...) que se encuentren prestando servicios en las zonas declaradas en estado de excepción, quedan sujetos a la aplicación del Código de Justicia Militar que constan en el ejercicio de sus funciones son de competencia del fuero privativo militar...”.

Dentro de la legalidad democrática se instauraba *un Estado paralelo controlado, dirigido e implementado, por las Fuerzas Armadas*. En las zonas de emergencia la población civil se vió sometida a la jurisdicción militar. El Estado de Derecho dejó de existir en estas áreas. La forma en que el gobierno de Belaúnde definió las funciones de los comandos político-militares fue definiendo también el curso que tomaría en los años siguientes la estrategia contrainsurgente del Estado. “Abdicación de la autoridad democrática”, la llamó Américas Watch;³⁰⁶ y fue criticada por no dar una respuesta a la subversión en la cual el gobierno civil democráticamente elegido tuviera la conducción de la estrategia contrainsurgente. Al mismo tiempo terminaron por convencer a los militares de que estaban ante un gobierno y principalmente ante un presidente que no les garantizaba la conducción de la lucha

³⁰⁶ AMERICAS WATCH. *Abdicating Democratic Authority*. Nueva York, 1984.

contrasubversiva y que ésta requería el respaldo político —léase impunidad— a su propio accionar militar.

Conclusiones

1. Los colonos norteamericanos, en general, no importaron a sus nuevas tierras un modo de producción decadente en Europa, el feudalismo; importaron, un nuevo espíritu que, posteriormente, iba a encarnar el nacimiento de un capitalismo comercial.
2. La mejor formación cultural como patrimonio europeo de los norteamericanos y su vinculación estrecha con el país que va a liderar las primeras revoluciones burguesas del mundo (Inglaterra) va a ser clave en el desarrollo del nuevo modo de producción en la sociedad norteamericana.
3. Los descubrimientos científicos por norteamericanos, fundamentalmente, y su aplicación en la tecnología productiva, será clave para una revolución en la economía mercantil de los estados de Norteamérica, como el vapor, la electricidad, el teléfono, la industrialización del país que los va a obligar a una expansión de su mercado externo para sus excedentes.
4. Esta expansión, inicialmente, se hizo en los límites de sus fronteras naturales (al interior) habitadas por las tribus norteamericanas, su mejor tecnología en armas de guerra y estrategia militar fueron claves en sus luchas por la consecución de ese objetivo.
5. El desarrollo de las colonias del norte y del sur en Norteamérica será cualitativamente distinto, el norte será capitalista mercantil, esencialmente; el sur no, allí subsistirán

formas de explotación servil, la esclavitud es un buen ejemplo siendo la esclavitud vital para la explotación de la tierra, en el norte no.

6. Las colonias nacieron como empresas privadas, con casas matrices en Inglaterra y otras ciudades de Reino Unido, lo que va beneficiar su desarrollo; fueron más independientes con el aparato administrativo colonial. De modo que cuando la corona les impone impuestos elevados a comienzos del siglo XVIII para compensar sus gastos de guerra europeas la reacción de rechazo va a ser natural en las colonias. Administrativamente éstas tenían su propia administración, si bien legitimadas por Actas de la Corona, su funcionalidad administrativa había sido independiente del aparato administrativo colonial, en lo fundamental, desde sus inicios, lo que será determinante para la cultura político administrativa en las colonias.
7. La administración colonial, desde sus inicios, estuvo en manos de quienes provenían de una clase media adinerada y educada, no crearon una división tajante en la clase dirigente como sí lo fue en los territorios del imperio español (entre los nativos europeos y los hijos de los europeos en el continente americano, los criollos). La razón, los de América del Norte vinieron con sus familias, los del imperio español no, en éste se importó la nobleza como institución política, un ejemplo fue el virrey, quien no era otra cosa que el representante del rey en suelo americano. En Norteamérica no se importó la nobleza como institución, las autoridades eran elegidas por voto de las mismas poblaciones, el sistema judicial era autóctono. Esto explica porque al término del

colonialismo la Constitución de los Estados Unidos va a contener una expresa prohibición respecto a los títulos de nobleza. En el norte florecerían las ideas republicanas y democráticas, embrionariamente; en el imperio español no.

8. La guerra civil consolidó las antes 13 colonias norteamericanas como una sola nación, un solo estado federal centralizado, una sola economía la capitalista, una clase dirigente con una ideología de la modernidad que recogía lo mejor de su propia revolución (anticolonial) y burguesa (la misma guerra civil), como los procesos democráticos que vivía la sociedad europea; deseaban ser una nación de naciones, un futuro imperio, poseían para entonces, como consecuencia de sus guerras una vasta extensión territorial con grandes riquezas que les permitía, por un lado, su autoabastecimiento, y por otro, generaban excedentes que necesitaban de un mercado para su exportación.
9. La vocación imperial de los Estados Unidos se expresará en las guerras de expansión de mediados del siglo XIX, y sus sucesivas incursiones hasta finales de ese siglo por todo el globo, la concretarán en lo que se conoce como sus doctrinas Monroe y la del Destino Manifiesto.
10. Las dos guerras mundiales serán decisivas para la consolidación del capitalismo (ya en su era imperial) de los Estados Unidos de Norte América.
11. El Estado benefactor fue el instrumento institucional que les sirvió como medio para enfrentar la crisis que se produjo como consecuencia de la gran depresión, de la instauración en el globo de un nuevo modo de producción el socialista y

un nuevo sistema político el comunista que le va disputar la hegemonía en el nuevo escenario que surge de la Primera y Segunda Guerra mundial.

12. Los nuevos instrumentos institucionales mundiales, creados por el imperialismo norteamericano en plena y luego de la Segunda Guerra Mundial serían el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional como instituciones crediticias usadas para la reconstrucción monetaria mundial en una primera etapa. Hoy, las mismas instituciones además del Organismo Mundial de Comercio son los encargados de diseñar las políticas macroeconómicas de los países endeudados con ellos para garantizar los pagos y posibilitar las garantías necesarias para un crecimiento sostenido y armónico acorde con los retos de la globalización.
13. En el caso peruano, en el mismo período la clase dirigente fue incapaz de estructurar un Estado-Nación por lo que no pudieron emprender un proceso revolucionario burgués capitalista. Continuó con sus viejos males de comienzo de la República. El poder se siguió concentrando en pocas manos, en una oligarquía terrateniente, incapaz de general cambios cualitativos en la estructura productiva y de generar y/o ampliar una mercado interno. La producción estuvo dirigida a la exportación.
14. La economía peruana creció ligada al capital extranjero, en las dos primeras guerras, por tanto, la economía la van a dirigir para satisfacer los requerimientos de mercado exterior, en tanto los países industrializados o más desarrollados estaban enfrascados en dos guerras mundiales, lo que generó por ese breve período una bonanza económica, que

fue a beneficiar a los sectores latifundistas. La oligarquía, fue incapaz de producir conocimiento científico y tecnológico propio.

15. La clase media que surgió con características contestatarias en la década del veinte y treinta pretendió conducir la política del país creando partidos políticos que van a ser las agrupaciones que intentarán centralizar las aspiraciones legítimas de los sectores populares. Estos partidos nacieron con un programa y un ideario revolucionario; con el tiempo este discurso va a ser abandonado para convivir con la clase gobernante que empleará un método conocido, represión y reformas parciales en el ámbito social: el aprismo fue el partido que lo hizo.
16. La clase gobernante logró doblegar a la pequeña burguesía radical de la década del treinta, personificada en su líder Víctor Raúl Haya de la Torre, así como en la dirigencia del Partido Comunista en la década del cuarenta, el pretexto fue que el país apoyaba a los aliados en lucha contra el fascismo. El fundador del Partido Socialista, José Carlos Mariátegui, ya había fallecido; sus seguidores apoyarán al gobierno por las mismas razones, lucha contra el fascismo, siguiendo las directrices del P.C. Ruso.
17. Haya de la Torre, fundador y jefe del Partido Aprista, primero convivirá con los terratenientes, en el período de 56 al 62; luego a partir del 63 hará una superconvivencia con quien los persiguió y los impulsó a la clandestinidad, el odrismo (cuyo jefe fue el general Manuel Odría el del golpe de estado de 1948 y quien aplicó del macartismo criollo en el país).

18. En la década de los 50 las Fuerzas Armadas toman "conciencia" de que no se puede luchar contra el comunismo si no se tiene claro de que el mundo está en guerra y que el enemigo está en todas partes y en ninguna. Que para enfrentarlo se deben abandonar los métodos tradicionales. Se encargarán de crear un Centro de Estudios; el Servicio de Inteligencia del Ejército, aplicará la Doctrina de Seguridad Nacional (que no es cosa que la doctrina contra el comunismo), en el ámbito institucional harán suya la Doctrina de Defensa Continental en defensa de la sociedad occidental y cristiana con la asesoría de las Fuerzas Armadas norteamericana.
19. Este sector institucional de las Fuerzas Armadas se convertirá, ya no será perro guardián de los sectores dominantes: la oligarquía terrateniente, la burguesía exportadora, los sectores bancarios y comerciales ligados al capital extranjero, sino que ellos mismos se convertirán en institución tutelar de la sociedad y del Estado; serán así, el único partido de estructura nacional, con doctrinas propias, estructuralmente jerarquizado, y que por primera vez, entrarán en la escena política de manera institucionalizada a partir del 1968 a 1980. En dos etapas, una radical "progresista" (Velasco Alvarado), y otra ligada a los sectores tradicionales del poder (Morales Bermúdez).
20. La experiencia electoral de los 80 y 90 se dará con un escenario particular y cualitativamente distinto con dos organizaciones subversivas alzadas en armas. La izquierda se dividió en aquellos que participaron del proceso

democrático y representativo del Estado (como táctica)³⁰⁷ y otro que rompiendo con este camino optará por las acciones armadas.

21. El Estado oficial se vio enfrentado a la dura realidad de un país dividido con profundas desigualdades sociales, con recesión, inflación, con un nivel de pobreza que estaba considerado entre los más bajos del mundo, con corrupción generalizada (Alan García), desconfianza en las instituciones del Estado en las organizaciones políticas. Los campesinos, de la zona de menos recursos económicos del país, se vieron arrinconados por una lucha subversiva y antisubversiva sangrienta que los obligó a realizar migraciones internas del campo a la ciudad. En esta lucha ambas partes transgredieron las normas de la guerra tradicional; consecuentemente se violaron los derechos humanos, se practicó por parte de las Fuerzas Armadas actos de torturas, detenciones arbitrarias, desaparecidos, grupos paramilitares anticomunistas, uso indebido de la fuerza del Estado contra la población civil y algunos de ellos con características de verdadero genocidio (Ucchurahay, Barrios Altos, masacre en los penales 1986, 1992, etc.). Las organizaciones de derechos humanos cuantificaron pérdidas en más de 36 000 personas; cuantiosos millones en pérdidas materiales en una población que vivía en un verdadero estado de pánico generalizado. Una gran parte del país vivió en estado de emergencia, es decir, en un Estado policiaco-militar dentro de otro Estado democrático y liberal. En el primero no existían los derechos democráticos; en el segundo, el pánico por preservarlos llevó

³⁰⁷ Similares argumentos fueron usados por el fundador y líder del APRA Víctor Raúl Haya de la Torre durante la convivencia y la superconvivencia.

a los magistrados a una franca abdicación del poder civil a los militares.

22. En este escenario Fujimori gana las elecciones de 1990.

23. El Estado-Nación, en 1990, siguió siendo un sueño; ha sido, por el contrario, una pesadilla de nefastas consecuencias concretas para la población del país. El fracaso para institucionalizar una de las columnas del Estado de la burguesía dependiente del capital extranjero, principalmente norteamericano, fue el fracaso del neoliberalismo en uno de los países más prometedores del Tercer Mundo; ha caído como cayeron las economías del sudeste asiático.